

el pago al FMI y la deuda interna¹

El Gobierno tomó la decisión de cancelar por adelantado la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, por 9.810 millones de dólares, utilizando para ello el 35% de las Reservas Internacionales del Banco Central. El objetivo anunciado es ganar “grados de libertad para la decisión nacional”, según expresó el primer mandatario en su discurso del jueves 15 de diciembre.

La medida tuvo un alto impacto mediático y generó diversas opiniones, según el punto de vista de cada sector social y político.

Dada la importancia del tema y su gravitación presente y futura en la vida de nuestro país, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, coherente con la defensa de los intereses nacionales, de las pymes y del conjunto de los sectores populares, hace llegar a sus cooperativas asociadas y la opinión pública su análisis sobre tal determinación.

La deuda que se pagará

La deuda que se pagará ha sido contraída en distintas oportunidades, como una forma de sustentar el sistema de la convertibilidad.

El propio presidente Kirchner reconoció que “La deuda que cancelamos con el Fondo Monetario Internacional, similar a la suma que ese organismo prestó para sostener el régimen de convertibilidad, condenado al fracaso, ha resultado por lejos la más condicionante...”.

Cabe recordar el préstamo del FMI realizado en el año 2001 bajo la denominación de “blindaje”, cercano a los 10.000 millones de dólares. El

(1) Declaración del IMFC con motivo de la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Buenos Aires, 21 de diciembre de 2005.

mismo posibilitó la salida de capitales privados especulativos de nuestro país por más de 13.000 millones de dólares, éxodo que impactó negativamente en la estabilidad del sistema financiero y la economía en general.

Esta actitud de prestar al filo del desenlace de fuertes crisis financieras como sucedió en Rusia y la Argentina, tiene una definición teórica precisa, conocida como “Riesgo Moral” puesto que beneficia a los acreedores especulativos privados, quienes perciben altas tasas por el riesgo de devaluación y con la llegada de capitales del FMI pueden huir obteniendo ganancias espectaculares en dólares, generando una fuerte crisis financiera y de pagos.

Frente a este comportamiento nefasto del Fondo Monetario Internacional, el IMFC considera la corresponsabilidad de los organismos financieros internacionales en la crisis argentina, cuestión que también ha sido reconocida por el presidente Kirchner y el ex ministro Lavagna. Sin embargo, la solución planteada desde el gobierno es diametralmente opuesta a la que proponemos. Mientras el Instituto Movilizador estableció en su “Propuesta para refundar la Nación” que el FMI no podía ser considerado un acreedor privilegiado y debía hacerse cargo de parte de los costos de la crisis mediante la aplicación de una quita al capital adeudado, el Poder Ejecutivo decide beneficiarlo pagando la totalidad de una deuda que sirvió para profundizar la peor crisis económica y social de la historia argentina.

La continuidad

La cancelación total ha sido presentada como un vuelco en las relaciones con el FMI y el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, los hechos demuestran que la decisión es parte de una política ya anunciada en varias oportunidades, conocida como “desendeudamiento”, en virtud de la cual desde el 2002 se han realizado pagos a los organismos financieros internacionales (FMI, BID y Banco Mundial) por cerca de 15.000 millones de dólares, una cifra superior a la que se cancelará este fin de año con el Fondo Monetario Internacional.

Debe aclararse que la deuda con el FMI, cuya cancelación se realiza a costa de un fuerte sacrificio, es una parte muy menor de la deuda total del gobierno argentino, al punto tal que después del pago Argentina continuará siendo uno de los países más endeudados, con un monto superior a los 100.000 millones de dólares.

Acerca de los condicionamientos del FMI, es oportuno recordar que hace dos años finalizó el último acuerdo con el organismo, y por lo tanto no había un convenio que diera lugar a imposiciones. Además el FMI aceptó, bajo la presión de Estados Unidos, esperar hasta la finalización del Canje de Deuda con los acreedores privados para volver a insistir en la necesidad de un nuevo acuerdo.

En cuanto a la orientación de la política económica, el presidente Kirchner ha expresado en su discurso del 15 de diciembre último que “Sobre la base de la solvencia fiscal, la sustentabilidad externa, la flexibilidad cambiaria, una política monetaria prudente, predecible y transparente y una política financiera sólida y anticíclica, podemos dar este paso que contribuirá a su vez a reafirmar un ambiente económico previsible”. Es decir, políticas que resultan muy similares a las exigidas por el FMI, las cuales se aparenta evitar con el pago que nos ocupa.

Un fuerte signo de continuidad en dichos lineamientos lo expresa la siguiente paradoja: mientras se anunciaba el desendeudamiento total, el Parlamento daba su primera aprobación al Presupuesto para el año 2006, el cual propone un fuerte superávit fiscal. Es decir, ingresos obtenidos por vía de los impuestos que no se destinarán al gasto social para resolver las necesidades urgentes y postergadas de los sectores sociales más desprotegidos.

Esta deuda social es aún acuciante: luego de haber logrado el mayor crecimiento del PIB de los últimos cien años, la población en situación de pobreza e indigencia se mantiene en los mismos niveles de fines de 2001 (38.5% y 13.6% respectivamente). Ello se debe en gran medida a que la distribución de los ingresos no se ha modificado desde el punto más crítico de la crisis del año 2002, pues el 20% más pobre de la población continúa recibiendo sólo el 4.4% de los ingresos totales, mientras que el 20% más rico mantiene una participación superior al 50%. Si bien se han creado puestos de trabajo, la mayoría de ellos es de mala calidad y han sido insuficientes para revertir la injusta distribución mencionada.

La lectura política

La cancelación de deudas responde a una política explícita del FMI, originada en la necesidad imperiosa de reducir su exposición crediticia, dado que el 80% de su deuda estaba concentrada en cinco países, entre los que se encuentran Turquía y también Argentina y Brasil, países que han anunciado la total cancelación, sumándose así a Rusia que ya ha concretado el “desendeudamiento”.

Esta política surge también de la solicitud de los países del Grupo de los Siete (G7), en especial Estados Unidos, que no desean incrementar sus aportes al Fondo Monetario “con el esfuerzo de los carpinteros y plomeros estadounidenses”, como lo expresara un funcionario del Tesoro norteamericano. Asimismo, fue el propio FMI quien recomendó utilizar las Reservas Internacionales de nuestro país para pagar deuda.

Queda claro, por lo tanto, que la política de desendeudamiento, más que una iniciativa propia de los países endeudados, surge como contrapartida de los intereses del FMI y sus socios más importantes, los países industrializados.

Las condiciones para un cambio

La independencia del país no se resuelve con pagarle al FMI, dado que el organismo internacional no es otra cosa que el representante de quienes detentan el verdadero poder político: los países industrializados y los grandes conglomerados empresarios que actúan en su territorio.

Una efectiva independencia parte de rechazar las presiones de estos países y los acuerdos de integración por ellos fomentados, los cuales tienden a incrementar en forma aguda la dependencia de los países periféricos, especialmente en temas como las inversiones extranjeras y las patentes.

Las condiciones actuales permiten imaginar un nuevo estilo de integración latinoamericana, que se ha vislumbrado en las cumbres de Mar del Plata, donde gracias al apoyo de la sociedad, como de los gobiernos del Mercosur ampliado, se ha podido poner un freno a las pretensiones de Estados Unidos para avanzar hacia el ALCA.

Esta política de desendeudamiento desplaza la atención de gastos sociales imprescindibles. En efecto, con lo que se ha pagado hasta ahora se podría haber resuelto el 40% del déficit habitacional de nuestro país, o duplicado la cantidad de establecimientos de salud existentes. Los 9.810 millones de dólares destinados al FMI equivalen a diez años del plan jefes y jefas de hogar.

Un verdadero cambio de rumbo, tal como lo expresamos con sólidos fundamentos en la “Propuesta para refundar la Nación”, puede lograrse mediante una política de distribución equitativa del ingreso y acciones de apoyo a la producción, que permitirán generar un crecimiento estable y armónico.